

Ciudad de México, a veintiocho de febrero de dos mil veinte.-

La magistrada **ELVA MARCELA VIVAR RODRÍGUEZ**, en su carácter de instructora del juicio y Presidenta de Sala, ante la Secretaria de Acuerdos **BLANCA XÓCHITL QUINTERO PANIAGUA**, quien da fe, con fundamento en el artículo **58-13**, en relación con los diversos 49, 50 y 52 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, procede a dictar sentencia en el expediente sumario en que se actúa; y,

RESULTANDO

Primero.- Presentación de la demanda.- Por escrito ingresado en la Oficialía de Partes Común para las Salas Regionales Metropolitanas de este tribunal, el **04 de diciembre de 2019**, compareció el C. ********* por su propio derecho a demandar la nulidad de la resolución contenida en el oficio ********* de fecha 16 de octubre de 2019, emitida por la Administración de Fiscalización a Grupos Societarios “5”, de la Administración General de Grandes Contribuyentes, en el cual, se le impone una multa en cantidad de \$52,120.00*

Segundo.- Admisión de la demanda.- Mediante acuerdo de **06 de diciembre de 2019**, se admitió a trámite la demanda de nulidad y se ordenó correr traslado a la autoridad demandada, emplazándola para que produjera su contestación a la demanda dentro del término de ley y exhibiera el expediente administrativo del que derivó la resolución impugnada.

Tercero.- Contestación a la demanda y plazo para alegatos.- En auto de fecha **07 de febrero de 2020**, se tuvo por contestada la demanda, por

exhibido el expediente administrativo y, toda vez que el presente expediente se encontraba debidamente integrado, se otorgó plazo legal a las partes para que formularan por escrito sus alegatos, por lo que quedó cerrada la instrucción, en términos del segundo párrafo del artículo 47 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, siendo procedente emitir la presente sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.- Competencia de la magistrada instructora.- La magistrada instructora de la Primera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa es competente para emitir la presente resolución, en términos de lo establecido por el artículo 3, fracción II, de la ley orgánica de este tribunal vigente a partir del diecinueve de julio de dos mil dieciséis; así como, también, de conformidad con lo preceptuado por los artículos 21, fracción XVII, y 22, fracción XVII, del reglamento interior de este tribunal, por virtud de que el domicilio de la parte actora se encuentra en la jurisdicción de las Salas Regionales Metropolitanas de este tribunal.

SEGUNDO.- La existencia de la resolución impugnada, se encuentra debidamente acreditada en autos con la exhibición que de ella realiza la autoridad demandada, en términos del artículo 46, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

TERCERO.- Legitimación

Activa. La parte actora está legitimada activamente, toda vez que el C. ***** interpuso el presente juicio por derecho propio.

Pasiva. El Subadministrador Desconcentrado de la Administración Desconcentrada Jurídica del Distrito Federal "4", de la Administración General Jurídica del Servicio de Administración Tributaria, está legitimado para contestar la demanda, conforme el artículo 5º, tercer párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

CUARTO.- Esta instrucción procede al estudio y resolución de manera conjunta de los conceptos de anulación marcados como **PRIMERO y SEGUNDO del escrito demanda**, por su estrecha relación entre sí, en los cuales la accionante manifestó de manera medular que, los fundamentos y motivos

expresados en la resolución impugnada son insuficientes para imponer la multa controvertida, ya que la enjuiciada le negó la prórroga solicitada, a fin de dar cumplimiento al requerimiento decretado, misma que era difícil de obtener y proporcionar; que el artículo 53, inciso c), segundo párrafo del Código Fiscal de la Federación, establece que las autoridades fiscales podrán ampliar el plazo de quince días para cumplir el requerimiento por diez días más, cuando se trate de informes cuyo contenido sea difícil de proporcionar o de difícil obtención, hipótesis en la que se ubicó.

Que contrario a lo señalado por la enjuiciada, no estaba obligada a acreditar en forma completa y suficiente las razones por las que considera que la información es de difícil obtención, ya que dicha obligación no se encuentra prevista en el artículo 53 del Código Fiscal de la Federación; que la información y documentación solicitada es de difícil obtención, ya que se trata de ejercicios anteriores y de volúmenes considerables que requiere ser revisada, analizada e integrada a detalle.

Continúa manifestando la impetrante que, la autoridad fiscal no está autorizada para solicitar información y documentación a manera de integraciones especiales, ya que dicha cuestión no está especificada en ley; que no fue omisa en proporcionar la totalidad de la documentación solicitada, ya que sí exhibió diversa información y documentación, lo cual se advierte de los escritos presentados ante la enjuiciada, aunado al hecho, de que la información solicitada no forma parte de su contabilidad, conforme a lo establecido en el artículo 28 del Código Fiscal de la Federación y su reglamento.

Que la facultad de otorgar prórroga a los contribuyentes es una facultad reglada no discrecional, por lo que, no existe tipicidad en la infracción, ya que, para su configuración es indispensable que exista una actitud de resistencia al cumplimiento, o bien, un desacato total, lo cual no aconteció, ya que sí dio cumplimiento al requerimiento que le fue efectuado; que no se actualizan la hipótesis establecidas en el artículo 85, fracción I del Código Fiscal de la Federación, en relación con el diverso 86, fracción I del mismo ordenamiento legal, ya que no existió incumplimiento al requerimiento que le fue efectuado, ni existió animo en incumplir con el mismo, aunado a que, la autoridad demandada fue omisa en analizar las circunstancias y factores que intervienen en la imposición de la

infracción, como lo es la capacidad económica, gravedad, etc., resultando excesiva dicha sanción.

La autoridad demandada sostuvo la legalidad de la resolución impugnada, manifestando que la misma se encuentra debidamente fundada y motivada; que la información y documentación solicitada a la actora forma parte de su contabilidad, aunado que la facultad para otorgar prórroga a los contribuyentes para exhibir la documentación e información solicitada es discrecional.

Que la accionante no acredita haber dado pleno y total cumplimiento al requerimiento que le fue formulado, ni que dicha información y documentación era difícil de obtener y proporcionar, por lo que, subsiste la infracción que se le atribuye; que se impuso la multa máxime que prevé el artículo 86 del Código Fiscal de la Federación, toda vez que, existió una agravante, es decir, la reincidencia, con independencia de que sí se tomaron en cuenta los elementos que permitían individualizar la misma.

Esta instrucción considera **INFUNDADOS** los argumentos en estudio, de acuerdo a los siguientes motivos y fundamentos.

Del examen que se realiza a la resolución impugnada, misma que obra en autos de folios 039 a 044 y que se valora en términos del artículo 46, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se advierte que la autoridad fiscal señaló, entre otras cuestiones que, mediante oficio número **900-03-05-00-00-2019-80109** de fecha 25 de marzo de 2019, solicitó a la hoy actora exhibir la información y documentación ahí especificada (folios 163 a 180 de autos), dando la hoy actora contestación a dicho oficio en fecha 16 de marzo de 2019, **exhibiendo de manera parcial la información y documentación solicitada y solicitando prórroga para presentar dicha información y documentación.**

La enjuiciada mediante oficio número **900-03-05-00-00-2019-1488** de fecha 04 de junio de 2019, le informó a la contribuyente que **no procedía otorgar la prórroga solicitada**, ya que a su consideración la información y documentación solicitada, forma parte de la contabilidad de la impetrante.

Asimismo, la autoridad fiscal estableció que, la actora mediante escritos presentados los días 16 de abril y 10 de mayo de 2019, presentó diversa información y documentación, **sin que haya dado cumplimiento total al requerimiento formulado**, razón por la cual, se le impuso en el oficio número 900-

03-05-00-00-2019-1497 de fecha 17 de junio de 2019, **una multa por la cantidad de \$17,370.00** (fojas 137 a 145 de autos).

La enjuiciada mediante diverso número **900-03-05-00-00-2019-1537** de fecha 05 de julio de 2019 (folios 130 a 134 de autos), **requirió a la hoy actora para que en un plazo de 15 días hábiles exhibiera la información y documentación que estaba pendiente de proporcionar.**

La hoy impetrante en escrito presentado el 16 de agosto de 2019, dio contestación de forma parcial al requerimiento formulado por la autoridad fiscal, solicitando una prórroga para presentar la información requerida en el oficio **900-03-05-00-00-2019-1537** de fecha 05 de julio de 2019, **la cual, ya le había sido requerida de manera previa en el diverso 900-03-05-00-00-2019-80109 de fecha 25 de marzo de 2019.**

En virtud de que, **la hoy actora no presentó de manera completa la información y documentación** solicitada en el oficio **900-03-05-00-00-2019-1537** de fecha 05 de julio de 2019, procedió a imponer una multa en cantidad de \$52,120.00, la cual es el monto máximo previsto en el artículo 86, fracción I, del Código Fiscal de la Federación **al considerar que existió reincidencia en suministrar de forma completa la información y documentación solicitada.**

A) Una vez precisado lo anterior, esta juzgadora *infundados* los argumentos de la actora en el sentido de que la enjuiciada debió otorgar la prórroga solicitada, ya que era una facultada reglada, así como el hecho de que no estaba obligada a acreditar que la información y documentación solicitada era difícil de obtener o difícil de proporcionar.

Contrario a lo señalado por la impetrante, la facultad de otorgar prórroga para el cumplimiento del requerimiento formulado en términos del artículo 53, inciso c), del Código Fiscal de la Federación, **constituye una facultad discrecional de la autoridad fiscal,** no así reglada como sostiene.

El artículo antes referido dispone, a la letra, lo siguiente:

“**Artículo 53.-** En el caso de que con motivo de sus facultades de comprobación, las autoridades fiscales soliciten éstos, informes o documentos del contribuyente, responsable solidario o tercero, se estará a lo siguiente:

Se tendrán los siguientes plazos para su presentación:

(...)

c) Quince días contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación de la solicitud respectiva, en los demás casos. Los plazos a que se refiere este inciso, se podrán ampliar por las autoridades fiscales por diez días más, cuando se trate de informes cuyo contenido sea difícil de proporcionar o de difícil obtención.

Del numeral supracitado, se desprende que, cuando la autoridad fiscal solicite a los contribuyentes, entre otros sujetos, informes o documentos, se deberán presentar los mismos en un plazo de **quince** días contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación de la solicitud respectiva, en los demás casos.

El plazo antes referido, podrá ampliarse por las autoridades fiscales por diez días más, **cuando se trate de informes cuyo contenido sea difícil de proporcionar o de difícil obtención.**

En este tenor, es claro que, la hipótesis para que la autoridad fiscal pueda otorgar prórroga (facultad que es discrecional), se actualiza cuando la información solicitada sea difícil de obtener o difícil de proporcionar.

Esta juzgadora hace notar que, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 763/2010, visible en la página de internet <http://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=121252>, precisó que, la facultad otorgada en el artículo 53, último párrafo, del Código Fiscal de la Federación, **es una facultad discrecional**, pronunciándose en los siguientes términos:

“(...)

Una vez precisado que este Alto Tribunal ha distinguido entre actos privativos y actos de molestia, para dilucidar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del último párrafo del artículo 53 del Código Fiscal de la Federación, es necesario precisar si la facultad de la autoridad fiscal de ampliar por diez días más, el plazo previsto para los demás casos que no se ubican en las hipótesis de los incisos a) y b) de ese precepto, en el caso de que con motivo de sus facultades de comprobación, las autoridades fiscales soliciten informes o documentos del contribuyente, responsable solidario o tercero, constituye un acto privativo o de molestia, de manera que para determinar lo anterior, debe advertirse la finalidad que con el precepto impugnado se persigue.

Así, el segundo párrafo del inciso c) del artículo 53 del Código Fiscal de la Federación dispone una facultad de la autoridad fiscal para ampliar el término que se concede al contribuyente, al responsable solidario o a un tercero, para la presentación de documentación que se requiera, pero sólo cuando se trate de informes cuyo contenido sea difícil de proporcionar o de difícil obtención.

Como se advierte, dicha facultad no se traduce en una disminución patrimonial o afectación definitiva a la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos del contribuyente, sino que representa un acto de la autoridad, tendiente únicamente a ampliar el término para la presentación de informes que debe proporcionar el contribuyente, el responsable solidario o un tercero.

En ese sentido, el simple acto de ampliar el término para la presentación de datos, informes o documentos, no implica que se le prive al gobernado derecho alguno, **pues la autoridad simplemente ejerce su facultad discrecional de ampliar el término para la presentación de la mencionada información, para llevar a cabo sus facultades de comprobación fiscal,** lo que se insiste, no conculca derechos relacionados con la libertad, la propiedad, posesiones o derechos del contribuyente.

Lo anterior es así, porque el simple acto de requerir documentación no implica que se prive al gobernado derecho alguno, pues la autoridad simplemente solicita datos o documentos adicionales, para llevar a cabo sus facultades de comprobación en relación con la situación fiscal de un contribuyente, lo que de manera alguna conculca definitivamente derechos relacionados con la libertad, la propiedad, posesiones o derechos del contribuyente.

Por tanto, si la citada facultad de la autoridad administrativa, impone una obligación a los contribuyentes que no implica la privación definitiva o produzca la disminución o menoscabo de un derecho al gobernado, debe decirse que no constituye un acto privativo, sino que se trata de un beneficio que el legislador les otorgó por ser quienes enfrentan la posible dificultad en la obtención de lo requerido y son los directamente interesados en presentar la información dentro del plazo legal.

[...]

Ahora, el artículo 53 del Código Fiscal de la Federación establece que cuando con motivo de sus facultades de comprobación las autoridades fiscales soliciten informes o documentos, al contribuyente, al responsable solidario o a un tercero, deberán presentarse en los plazos que el propio numeral prevé en cada uno de sus incisos, de los cuales el c), dispone el plazo de quince días cuando lo requerido no verse sobre libros y registros que conforme la contabilidad o de documentos que deba tener en su poder el contribuyente; es decir, dicho plazo puede ampliarse por las autoridades por diez días más, cuando se trate de informes cuyo contenido sea difícil de proporcionar o de difícil obtención.

En ese sentido, el citado precepto al establecer que el término de quince días previsto en el inciso c), podrá ampliarse cuando se trate de informes cuyo contenido sea difícil de proporcionar o de difícil obtención, no viola la garantía de seguridad jurídica contenida en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Lo anterior es así, porque la posibilidad de ampliar el término previsto en el inciso c) cuando se trate de informes cuyo contenido sea difícil de proporcionar o de difícil obtención, no constituye una potestad arbitraria de la autoridad fiscal, en la medida de que ésta no puede ampliar el término en los casos de su elección de manera caprichosa; sino, por el contrario, **se trata de una facultad discrecional a cargo de la autoridad fiscal competente, la cual consiste en determinar si en cada caso concreto, la documentación requerida al contribuyente se trata de informes** cuyo contenido resulta difícil de proporcionar o de difícil obtención, y para su ejercicio debe cumplir con el imperativo de fundar y motivar sus determinaciones, en acatamiento al principio de legalidad previsto en el artículo 16 constitucional, lo cual tiende a eliminar la posibilidad de que establezca arbitrariamente los supuestos de la ampliación del término para la presentación de los informes con las características referidas, ya que al efecto deberá describir claramente los hechos concretos que justifican que los documentos requeridos se tratan de informes cuyo contenido es difícil de proporcionar o de difícil obtención.

En efecto, **constituye una facultad discrecional, porque la actualización de la consecuencia legal prevista en la norma no requiere la satisfacción de requisitos legales fijos y específicos, sino que está en función de un juicio de valorización realizado por la autoridad fiscal en el que, apreciando las peculiaridades y condiciones del caso concreto,** determinará la procedencia de la medida citada (ampliación del término), dentro del marco de referencia previsto por la ley, el cual únicamente alude en relación a que los documentos requeridos se traten de informes cuyo contenido resulte difícil de proporcionar o de difícil obtención.

En ese sentido su ejercicio como acto de autoridad, únicamente deberá cumplir con las garantías de fundamentación y motivación consagradas constitucionalmente, pero su otorgamiento no constituye un derecho exigible por el contribuyente, ya que ello dependerá del juicio realizado por la autoridad fiscal, en el que concluya que en el caso concreto se trata o no de informes cuyo contenido es difícil de proporcionar o de difícil obtención.

Así, **al tratarse de una facultad discrecional de la cual está dotada la autoridad, para su ejercicio debe cumplir con el imperativo de fundar y motivar sus determinaciones,** en acatamiento al principio de legalidad previsto en el artículo 16 constitucional, la facultad de la autoridad fiscal prevista en el segundo párrafo del inciso c) del artículo 53 del Código Fiscal de la Federación, no resulta violatoria de la garantía de seguridad jurídica, puesto que dicho precepto contiene los elementos mínimos para hacer valer el derecho del gobernado y para que, sobre este aspecto, la autoridad no incurra en arbitrariedades.
(...)

(El énfasis es nuestro)”

De la ejecutoria antes trascrita, se observa que, la Segunda Sala del Máximo Tribunal destacó **que el otorgamiento de una prórroga para el cumplimiento del requerimiento constituye una facultad discrecional de la autoridad fiscal,** misma que no se ejerce de forma arbitraria, ya que se le impone la obligación de plasmar un juicio de valorización en el que, apreciando las peculiaridades y condiciones del caso concreto, determinará la procedencia de la prórroga respectiva, la cual, se reitera procederá a juicio de la autoridad fiscal, tratándose de informes cuyo contenido resulte difícil de proporcionar o de difícil obtención.

En este tenor, es claro que, la interpretación que debe darse al término “podrán” contenido en el artículo 53, inciso c), del Código Fiscal de la Federación, es de una facultad discrecional, misma que debe fundarse y motivarse.

Robustece lo antes expuesto, la jurisprudencia emitida por este tribunal, cuyo texto reza:

“II-J-165

FACULTADES REGLADAS Y FACULTADES DISCRECIONALES.- SU DISTINCION.- Cuando las facultades o poderes de que se encuentra investido el órgano administrativo se hallan establecidos en la ley, no sólo señalando la autoridad competente para obrar, sino también su obligación de obrar y cómo debe hacerlo, en forma que no deja margen alguno para la apreciación subjetiva del funcionario sobre las circunstancias del acto, se está en presencia de facultades o poderes totalmente reglados, vinculado su ejercicio por completo a la ley. En cambio, cuando el órgano administrativo se encuentra investido de facultades o poderes para actuar cuando lo crea oportuno, o para obrar según su prudente juicio, buscando la mejor satisfacción de las necesidades colectivas que constituyen el fin de su actuación, por cuanto la ley otorga cualquiera de esas posibilidades en forma expresa o tácita y con mayor o menor margen de libertad, entonces se habla del ejercicio de facultades discrecionales.

Revisión No. 363/80.- Resuelta en sesión de 20 de mayo de 1982, por mayoría de 6 votos, 1 más con los resolutivos y 1 en contra.- Magistrado Ponente: Mariano Azuela Güitrón.- Secretario: Lic. Oscar Roberto Enríquez Enríquez.

Revisión No. 440/82.- Resuelta en sesión de 26 de enero de 1983, por unanimidad de 8 votos.- Magistrado Ponente: Francisco Ponce Gómez.- Secretario: Lic. Manuel Castellanos Tortolero.

Revisión No. 2267/82.- Resuelta en sesión de 29 de abril de 1983, por unanimidad de 6 votos.- Magistrado Ponente: Alfonso Cortina Gutiérrez.- Secretaria: Lic. Ma. Estela Ferrer Mac Gregor Poisot.

TESIS DE JURISPRUDENCIA No. 165. (Texto aprobado en sesión de 18 de mayo de 1983).

R.T.F.F. Segunda Epoca. Año V. No. 42. Junio 1983. p. 871”

Esta instrucción hace notar que, si bien es cierto que, el artículo que nos ocupa no impone la obligación en los contribuyentes de acreditar que la información solicitada es difícil de obtener o difícil de proporcional, también lo es que, sí deben dar elementos a la autoridad fiscal para que ésta pueda determinar que la información solicitada se ubica en la hipótesis que prevé el artículo 53, último párrafo, del Código Fiscal de la Federación.

Esta juzgadora advierte que, la actora en los escritos presentados los días **16 de abril y 16 de agosto de 2019** (fojas 124 a 129 y 160 a 162 de autos), solicitó la prórroga a efecto de poder exhibir la documentación e información que le fue requerida, manifestando que los informes, datos y documentos solicitados *“representan una cantidad significativa de información y documentación que para ser recabada, analizada, integrada y proporcionada requiere una representativa carga administrativa adicional, toda vez que es de difícil obtención por ser de ejercicios anteriores”*.

Sin embargo, dichos argumentos resultaron insuficientes para la enjuiciada, a fin de concluir que, la información solicitada era difícil de obtener o de proporcionar, quien al negar la prórroga solicitada manifestó que concluyendo que dicha información formaba parte de la contabilidad que la actora, se encuentra obligada a llevar para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, de conformidad con los artículos 28 y 30 del Código Fiscal de la Federación y 33 de su reglamento vigentes en dos mil catorce -ejercicio revisado.

Esta juzgadora considera que, tal y como lo manifestó la autoridad demandada, **la información solicitada sí forma parte de la contabilidad de la actora**, ya que se ubica en las hipótesis de los artículos antes referidos, mismos que disponen:

"CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

Artículo 28.- Las personas que de acuerdo con las disposiciones fiscales estén obligadas a llevar contabilidad, estarán a lo siguiente:

I. La contabilidad, para efectos fiscales, se integra por los libros, sistemas y registros contables, papeles de trabajo, estados de cuenta, cuentas especiales, libros y registros sociales, control de inventarios y método de valuación, discos y cintas o cualquier otro medio procesable de almacenamiento de datos, los equipos o sistemas electrónicos de registro fiscal y sus respectivos registros, además de la documentación comprobatoria de los asientos respectivos, así como toda la documentación e información relacionada con el cumplimiento de las disposiciones fiscales, la que acredite sus ingresos y deducciones, y la que obliguen otras leyes; en el Reglamento de este Código se establecerá la documentación e información con la que se deberá dar cumplimiento a esta fracción, y los elementos adicionales que integran la contabilidad.

(...)

Artículo 30. Las personas obligadas a llevar contabilidad deberán conservarla a disposición de las autoridades fiscales de conformidad con la fracción III del artículo 28 de este Código.

Las personas que no estén obligadas a llevar contabilidad deberán conservar en su domicilio a disposición de las autoridades, toda

documentación relacionada con el cumplimiento de las disposiciones fiscales.

La documentación a que se refiere el párrafo anterior de este artículo y la contabilidad, deberán conservarse durante un plazo de cinco años, contado a partir de la fecha en la que se presentaron o debieron haberse presentado las declaraciones con ellas relacionadas. Tratándose de la contabilidad y de la documentación correspondiente a actos cuyos efectos fiscales se prolonguen en el tiempo, el plazo de referencia comenzará a computarse a partir del día en el que se presente la declaración fiscal del último ejercicio en que se hayan producido dichos efectos. Cuando se trate de la documentación correspondiente a aquellos conceptos respecto de los cuales se hubiera promovido algún recurso o juicio, el plazo para conservarla se computará a partir de la fecha en la que quede firme la resolución que les ponga fin. Tratándose de las actas constitutivas de las personas morales, de los contratos de asociación en participación, de las actas en las que se haga constar el aumento o la disminución del capital social, la fusión o la escisión de sociedades, de las constancias que emitan o reciban las personas morales en los términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta al distribuir dividendos o utilidades, de la información necesaria para determinar los ajustes a que se refieren los artículos 22 y 23 de la ley citada, así como de las declaraciones de pagos provisionales y del ejercicio, de las contribuciones federales, dicha documentación deberá conservarse por todo el tiempo en el que subsista la sociedad o contrato de que se trate.

(...)

REGLAMENTO DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

ARTÍCULO 33.- Para los efectos del artículo 28, fracciones I y II del Código, se estará a lo siguiente:

A. Los documentos e información que integran la contabilidad son:

I. Los registros o asientos contables auxiliares, incluyendo el catálogo de cuentas que se utilice para tal efecto, así como las pólizas de dichos registros y asientos;

II. Los avisos o solicitudes de inscripción al registro federal de contribuyentes, así como su documentación soporte;

III. Las declaraciones anuales, informativas y de pagos provisionales, mensuales, bimestrales, trimestrales o definitivos;

IV. Los estados de cuenta bancarios y las conciliaciones de los depósitos y retiros respecto de los registros contables, incluyendo los estados de cuenta correspondientes a inversiones y tarjetas de crédito, débito o de servicios del contribuyente, así como de los monederos electrónicos utilizados para el pago de combustible y para el otorgamiento de vales de despensa que, en su caso, se otorguen a los trabajadores del contribuyente;

V. Las acciones, partes sociales y títulos de crédito en los que sea parte el contribuyente;

VI. La documentación relacionada con la contratación de personas físicas que presten servicios personales subordinados, así como la relativa a su inscripción y registro o avisos realizados en materia de seguridad social y sus aportaciones;

VII. La documentación relativa a importaciones y exportaciones en materia aduanera o comercio exterior;

VIII. La documentación e información de los registros de todas las operaciones, actos o actividades, los cuales deberán asentarse conforme a los sistemas de control y verificación internos necesarios, y

IX. Las demás declaraciones a que estén obligados en términos de las disposiciones fiscales aplicables.

B .Los registros o asientos contables deberán:

I. Ser analíticos y efectuarse en el mes en que se realicen las operaciones, actos o actividades a que se refieran, a más tardar dentro de los cinco días siguientes a la realización de la operación, acto o actividad;

II. Integrarse en el libro diario, en forma descriptiva, todas las operaciones, actos o actividades siguiendo el orden cronológico en que éstos se efectúen, indicando el movimiento de cargo o abono que a cada una corresponda, así como integrarse los nombres de las cuentas de la contabilidad, su saldo al final del período de registro inmediato anterior, el total del movimiento de cargo o abono a cada cuenta en el periodo y su saldo final.

Podrán llevarse libros diario y mayor por establecimientos o dependencias, por tipos de actividad o por cualquier otra clasificación, pero en todos los casos deberán existir los libros diario y mayor general en los que se concentren todas las operaciones del contribuyente;

III. Permitir la identificación de cada operación, acto o actividad y sus características, relacionándolas con los folios asignados a los comprobantes fiscales o con la documentación comprobatoria, de tal forma que pueda identificarse la forma de pago, las distintas contribuciones, tasas y cuotas, incluyendo aquellas operaciones, actos o actividades por las que no se deban pagar contribuciones, de acuerdo a la operación, acto o actividad de que se trate;

IV. Permitir la identificación de las inversiones realizadas relacionándolas con la documentación comprobatoria o con los comprobantes fiscales, de tal forma que pueda precisarse la fecha de adquisición del bien o de efectuada la inversión, su descripción, el monto original de la inversión, el porcentaje e importe de su deducción anual, en su caso, así como la fecha de inicio de su deducción;

V. Relacionar cada operación, acto o actividad con los saldos que den como resultado las cifras finales de las cuentas;

VI. Formular los estados de posición financiera, de resultados, de variaciones en el capital contable, de origen y aplicación de recursos, así como las balanzas de comprobación, incluyendo las cuentas de orden y las notas a dichos estados;

VII. Relacionar los estados de posición financiera con las cuentas de cada operación;

VIII. Identificar las contribuciones que se deban cancelar o devolver, en virtud de devoluciones que se reciban y descuentos o bonificaciones que se otorguen conforme a las disposiciones fiscales;

IX. Comprobar el cumplimiento de los requisitos relativos al otorgamiento de estímulos fiscales y de subsidios;

X. Identificar los bienes distinguiendo, entre los adquiridos o producidos, los correspondientes a materias primas y productos terminados o semiterminados, los enajenados, así como los destinados a donación o, en su caso, destrucción;

XI. Plasmarse en idioma español y consignar los valores en moneda nacional. Cuando la información de los comprobantes fiscales o de los datos y documentación que integran la contabilidad estén en idioma distinto al español, o los valores se consignen en moneda extranjera, deberán acompañarse de la traducción correspondiente y señalar el tipo de cambio utilizado por cada operación;

XII. Establecer por centro de costos, identificando las operaciones, actos o actividades de cada sucursal o establecimiento, incluyendo aquéllos que se localicen en el extranjero;

XIII. Señalar la fecha de realización de la operación, acto o actividad, su descripción o concepto, la cantidad o unidad de medida en su caso, la forma de pago de la operación, acto o actividad, especificando si fue de contado, a crédito, a plazos o en parcialidades, y el medio de pago o de extinción de dicha obligación, según corresponda.

Tratándose de operaciones a crédito, a plazos o en parcialidades, por cada pago o abono que se reciba o se realice, incluyendo el anticipo o enganche según corresponda. Además de lo señalado en el párrafo anterior, deberán registrar el monto del pago, precisando si se efectúa en efectivo, transferencia interbancaria de fondos, cheque nominativo para abono en cuenta, tarjeta de débito, crédito o de servicios, monedero electrónico o por cualquier otro medio. Cuando el pago se realice en especie o permuta, deberá indicarse el tipo de bien o servicio otorgado como contraprestación y su valor;

XIV. Permitir la identificación de los depósitos y retiros en las cuentas bancarias abiertas a nombre del contribuyente y conciliarse contra las operaciones realizadas y su documentación soporte, como son los estados de cuenta emitidos por las entidades financieras;

XV. los registros de inventarios de mercancías, materias primas, productos en proceso y terminados, en los que se llevará el control sobre los mismos, que permitan identificar cada unidad, tipo de mercancía o producto en proceso y fecha de adquisición o enajenación según se trate, así como el aumento o la disminución en dichos inventarios y las existencias al inicio y al final de cada mes y al cierre del ejercicio fiscal, precisando su fecha de entrega o recepción, así como si se trata de una devolución, donación o destrucción, cuando se den estos supuestos.

Para efectos del párrafo anterior, en el control de inventarios deberá identificarse el método de valuación utilizado y la fecha a partir de la cual se usa, ya sea que se trate del método de primeras entradas primeras salidas, últimas entradas primeras salidas, costo identificado, costo promedio o detallista según corresponda;

XVI. los registros relativos a la opción de diferimiento de la causación de contribuciones conforme a las disposiciones fiscales, en el caso que se

celebren contratos de arrendamiento financiero. Dichos registros deberán permitir identificar la parte correspondiente de las operaciones en cada ejercicio fiscal, inclusive mediante cuentas de orden;

XVII. El control de los donativos de los bienes recibidos por las donatarias autorizadas en términos de la ley del Impuesto sobre la Renta, el cual deberá permitir identificar a los donantes, los bienes recibidos, los bienes entregados a sus beneficiarios, las cuotas de recuperación que obtengan por los bienes recibidos en donación y el registro de la destrucción o donación de las mercancías o bienes en el ejercicio en el que se efectúen, y

XVIII. Contener el impuesto al valor agregado que le haya sido trasladado al contribuyente y el que haya pagado en la importación, correspondiente a la parte de sus gastos e inversiones, conforme a los supuestos siguientes:

a) La adquisición de bienes, de servicios y el uso o goce temporal de bienes, que se utilicen exclusivamente para realizar sus actividades por las que deban pagar el impuesto;

b) la adquisición de bienes, de servicios y el uso o goce temporal de bienes, que se utilicen exclusivamente para realizar sus actividades por las que no deban pagar el impuesto, y

e) la adquisición de bienes, de servicios y el uso o goce temporal de bienes, que se utilicen indistintamente para realizar tanto actividades por las que se deba pagar el impuesto, como aquéllas por las que no se está obligado al pago del mismo.

Cuando el destino de los bienes o servicios varíe y se deba efectuar el ajuste del acreditamiento previsto en el artículo 50.-A de la ley del Impuesto al Valor Agregado, se deberá registrar su efecto en la contabilidad."

De lo antes expuesto, esta instrucción considera que la información y documentación que no fue presentada por la actora, sí forma parte de su contabilidad.

A mayor abundamiento, esta juzgadora hace notar que, si bien la autoridad demandada negó la prórroga solicitada por la hoy actora, también lo es que, **le hizo dos requerimientos respecto de la misma información y documentación, ya que fue omisa en exhibir de manera total y completa la información y documentación solicitada en los escritos presentados.**

De igual forma, de las constancias que obran en autos como de la resolución impugnada, se observa que, del primer requerimiento (notificado a la actora el 26 de marzo de 2019) al segundo requerimiento que realizó la autoridad demandada (notificado el 11 de julio de 2019), transcurrieron **casi 4 meses, sin que la accionante exhibiera la información y documentación faltante, haciéndose acreedora a una primera multa, misma que se impuso previamente a la hoy impugnada.**

En este tenor, es claro que, con independencia de que la enjuiciada no otorgó las prórrogas solicitadas por la accionante, **ésta fue omisa en cumplir con los requerimientos formulados, existiendo un tiempo suficiente entre cada requerimiento para su desahogo.**

En efecto, la impetrante se duele de que la autoridad traída a juicio no le otorgó prórroga para presentar la documentación solicitada, sin acreditar que la misma sí fue presentada, dando cumplimiento a los requerimientos formulados por la enjuiciada.

Aunado a lo anterior, no pasa inadvertido para esta juzgadora que, el requerimiento de información que hizo la autoridad fiscal versó respecto de información de servicio que fueron prestados por la impetrante o recibos por ella, los cuales no eran de difícil obtención o de difícil exhibición, **señalándose que, en todo caso si dicha información no se encontraba en su poder, debió informárselo a la autoridad demandada, con independencia de que, al formar parte de su contabilidad tiene la obligación de contar con esos datos.**

De ahí que, esta juzgadora considere que la accionante no acredita que la negativa de la autoridad para conceder la prórroga solicitada sea ilegal, reiterándose que, **no dio cumplimiento a los requerimientos formulados, es decir, no exhibió de manera completa y total la información solicitada por la enjuiciada.**

Tan es así, que la autoridad fiscal de manera previa impuso a la actora una multa en cantidad de \$17,370.00, tal y como se señaló con anterioridad.

En este tenor, contrario a lo manifestado por la actora, **sí se actualiza la hipótesis del 85, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, en virtud, de que la multa debatida fue impuesta ante la omisión de la actora de proporcionar de forma completa la documentación e información solicitada, omisión que no desvirtuó en el presente juicio.**

Dicho numeral es del tenor literal siguiente:

“Artículo 85.- Son infracciones relacionadas con el ejercicio de la facultad de comprobación las siguientes:

I. Oponerse a que se practique la visita en el domicilio fiscal. No suministrar los datos e informes que legalmente exijan las autoridades fiscales; no proporcionar la contabilidad o parte de ella, el contenido de las cajas de valores y en general, los elementos que se requieran para comprobar el cumplimiento de obligaciones propias o de terceros, o no aportar la documentación requerida por la autoridad conforme a lo señalado en el artículo 53-B de este Código.

(...)”

Por tanto, es claro que, al establecer el artículo 85, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, que son infracciones relacionadas con el ejercicio de la facultad de comprobación, el no suministrar los datos e informes que legalmente exijan las autoridades fiscales, la infracción prevista abarca tanto el incumplimiento total como el incumplimiento parcial por parte de los contribuyentes, en virtud de que dicho numeral no hace distinción.

Robustece lo antes expuesto, la tesis VI.A.52 A, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XI, de abril de dos mil, página 949, misma que reza:

“EXHIBICIÓN PARCIAL DE DOCUMENTOS O INFORMACIÓN REQUERIDA POR LA AUTORIDAD HACENDARIA. CONSTITUYE UNA INFRACCIÓN SANCIONADA POR EL ARTÍCULO 85, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. Dicho precepto legal establece como infracción relacionada el ejercicio de la facultad de comprobación, entre otras, "no suministrar los datos e informes que legalmente exijan las autoridades fiscales"; por tanto, constituye violación a las disposiciones fiscales no exhibir los documentos o datos que la autoridad hacendaria en ejercicio de sus facultades de comprobación requiera a los contribuyentes; documentos, datos o información que deberán exhibirse conforme a lo solicitado; consecuentemente, basta que el particular omita aportar una parte de los documentos que tiene obligación de entregar a la autoridad con motivo del requerimiento formulado, para que se actualice la hipótesis prevista por el artículo en comento."

Asimismo, robustece lo antes expuesto, por analogía, la siguiente tesis emitida por este tribunal, cuyo texto dispone:

"ENTREGA PARCIAL DE DOCUMENTACIÓN REQUERIDA. SÍ ACTUALIZA LA INFRACCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 85, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. - Si el particular aduce en el juicio de nulidad que es infundada la imposición de una multa impuesta por el Servicio de Administración Tributaria, en virtud de que, si cumplió, parcialmente, el requerimiento que le fue dirigido, y por ello no se ajusta la conducta desplegada al supuesto normativo, que, en cuanto a su redacción, exige una omisión total en el cumplimiento, ese argumento debe considerarse infundado. En efecto, el precepto legal indica que se considerará una infracción relacionada con el ejercicio de las facultades de comprobación, entre otras, no suministrar los datos e informes que legalmente exijan las autoridades fiscales; o no proporcionar la totalidad o parte de la contabilidad; o no suministrar los elementos que se requieran para comprobar el cumplimiento de

obligaciones fiscales propias. Por ende, si al tratar de atender esa solicitud, el particular no actúa en los términos ordenados, es evidente que actualiza el supuesto previsto en la fracción I, de artículo 85 del Código Fiscal de la Federación, puesto que en el propio oficio de requerimiento se especificó que debía presentar la información, documentación y datos solicitados, "en forma completa, correcta y oportuna". En ese sentido, el hecho de no atender un mandato de autoridad competente, incluso de manera parcial, es suficiente para ubicar al contribuyente en las conductas infractoras previstas en el numeral invocado, en virtud de que estimar que únicamente es ilegal la omisión total en el cumplimiento, implicaría dejar al arbitrio de los particulares la información que desean, les conviene o tienen a su alcance, presentar ante la autoridad administrativa a efecto de dar respuesta a una solicitud de tal naturaleza. La consecuencia natural de esa postura implicaría que la autoridad se viera imposibilitada para exigir o sancionar el incumplimiento (total o parcial) de los gobernados ante las solicitudes o requerimientos que les formularan, hecho que además impediría realizar en modo debido el ejercicio de las facultades de comprobación de las autoridades fiscales. Por ende, el simple hecho de no dar cumplimiento a uno de los puntos materia del requerimiento de autoridad, es suficiente para concluir que los particulares cometieron una infracción relacionada con el ejercicio de las facultades de comprobación, puesto que no proporcionaron de manera total los elementos necesarios para que las autoridades pudieran comprobar el debido y oportuno cumplimiento de las obligaciones fiscales a su cargo, en función de que la falta de documentos, informes o datos, impidieron conocer a fondo las actividades del contribuyente revisado. Consecuentemente, aun cuando el cumplimiento dado a un requerimiento de autoridad, para efecto de ejercer las facultades de comprobación, haya sido cumplido de manera parcial, se actualiza el supuesto de infracción contenido en la fracción I, del artículo 85 del Código Fiscal de la Federación, razón suficiente para estimar que el contribuyente omiso (aun parcial) se ha hecho acreedor a la sanción correspondiente."

B) Por otra parte, las manifestaciones de la actora en el sentido de que la multa impuesta no se encuentra fundada y motivada, así como que la misma es excesiva, resultan ser infundadas.

En la resolución impugnada, la autoridad demandada sí señaló los motivos y razones por las cuales consideró que se actualizaba la hipótesis del artículo 85, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, así como las razones por las cuales consideró procedente imponer como multa la cantidad de \$52,120.00, monto máximo que establece el artículo 86, fracción I, del referido código, señalando que se actualizaba la reincidencia, agravante establecida en el artículo 75, primer párrafo, fracción I, inciso b) del Código Fiscal de la Federación vigente, numeral que dispone lo siguiente:

“Artículo 75.- Dentro de los límites fijados por este Código, las autoridades fiscales al imponer multas por la comisión de las infracciones

señaladas en las leyes fiscales, incluyendo las relacionadas con las contribuciones al comercio exterior, deberán fundar y motivar su resolución y tener en cuenta lo siguiente:

I. Se considerará como agravante el hecho de que el infractor sea reincidente. Se da la reincidencia cuando:

(...)

b). Tratándose de infracciones que no impliquen omisión en el pago de contribuciones, la segunda o posteriores veces que se sancione al infractor por la comisión de una infracción establecida en el mismo artículo y fracción de este Código.

Para determinar la reincidencia, se considerarán únicamente las infracciones cometidas dentro de los últimos cinco años.

Se reitera que, en el caso que nos ocupa, la autoridad demandada impuso una multa en el oficio ***** de fecha 17 de junio de 2019, toda vez que, la hoy actora no presentó la información y documentación que le fue requerida en el 900-03-05-00-00-2019-80109 de fecha 25 de marzo de 2019, dentro del plazo de quince días que le fueron concedidos, en términos del artículo 53 primer y segundo párrafo, inciso c), del Código Fiscal de la Federación, **actualizándose la hipótesis de reincidencia, cuestión que la actora no negó, ni desvirtuó.**

Aunado a lo anterior, no pasa inadvertido para esta juzgadora que, la autoridad demanda sí consideró los elementos que le permitían individualizar la multa controvertida, es decir: **I)** los daños producidos o susceptibles de producirse; **II)** el carácter intencional de la acción u omisión; **III)** la gravedad de la infracción, y **IV)** la reincidencia del infractor, como lo impone el artículo 75, fracción I, inciso b) del Código Fiscal de la Federación; señalando los motivos y fundamentos por los cuales, consideró que se actualizaban dicho elementos.

Esta instrucción hace nota que, contrario a lo entendido por la accionante, la determinación de gravedad de la conducta no deriva de su previsión en la norma en tales términos, sino de los motivos que la autoridad demandada tomó en cuenta para su calificación, quien en la especie consideró que la conducta de la actora se agrava **derivado de que en dos ocasiones fue omisa en aportar la totalidad de la documentación e información que le fue requerida,** a fin de que la autoridad demandada pudiera llevar a cabo la determinación de su situación fiscal, reiterándose que el cumplimiento dado por la actora **fue parcial, lo cual ella reconoce expresamente, reconocimiento que constituye una confesión en términos del artículo 46, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.**

Aunado a que, la accionante fue omisa en acreditar haber cumplido de forma integral dicho requerimiento de información y documentación, cuestión que

impidió a la enjuiciada tomar en cuenta al momento de emitir la resolución e imponer la sanción que ahora se controvierte.

Finalmente, por lo que hace al factor de capacidad económica, no se pierde de vista que, tal como fue establecido por la autoridad demanda en la resolución impugnada, la actora tiene el carácter de gran contribuyente de acuerdo a lo establecido por el artículo 28, Apartado B, fracción III del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, es decir, que tiene ingresos acumulables anuales mayores a mil doscientos cincuenta millones de pesos.

Lo anterior, se desprende de la foja 1, de la resolución impugnada, misma que establece:

HACIENDA **SAT** **2019**
Administración General de Grandes Contribuyentes
Administración Central de Fiscalización a Grupos de Sociedades
Administración de Fiscalización a Grupos de Sociedades

Oficio: 900-03-05-00-00-2019-1675
RFC: COM091203526 Folio Único: 2304588
Exp: GSD9400088/19

Asunto: Se impone multa por no presentar en forma completa la documentación e información solicitada.

Ciudad de México, a 16 de octubre de 2019.
"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata".

Atestada en la Ciudad de México,
C.P. 14140 Ciudad de México.
Presente

Esta Administración de Fiscalización a Grupos de Sociedades "5", de la Administración Central de Fiscalización a Grupos de Sociedades, con sede en la Ciudad de México, adscrita a la Administración General de Grandes Contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria, autoridad competente para emitir el presente, en virtud de que la contribuyente [REDACTED] se ubica en el supuesto establecido en la fracción II, del Apartado B, del artículo 28 del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria vigente, en relación con el Artículo Quinto, fracción I, inciso a) del Acuerdo mediante el cual se delegan diversas atribuciones a servidores públicos del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de junio de 2016, vigente a partir del 23 de julio del mismo año, conforme al Artículo PRIMERO Transitorio del citado Acuerdo; toda vez que determina su Impuesto sobre la Renta en términos del Capítulo VI, del Título II de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente, en su carácter de sociedad integrada, al haber presentado su sociedad integradora [REDACTED] el aviso para ejercer dicha opción en fecha 17 de febrero de 2014 y el aviso para incorporar a dicho régimen a la sociedad [REDACTED] en fecha de 03 de julio de 2015, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Noveno, fracción XVII, párrafo primero, de las Disposiciones Transitorias de la Ley del Impuesto sobre la Renta publicada el 11 de diciembre de 2013, vigente a partir del 1º de enero de 2014, en relación con el artículo Décimo Noveno Transitorio de la Primera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de marzo de 2014; asimismo, se ubica en el supuesto que establece la fracción III, del Apartado B, del artículo 28 del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria vigente, ya que consignó en su declaración normal correspondiente al ejercicio fiscal de 2018, que es el último ejercicio fiscal declarado a esta fecha, un total de ingresos acumulables para efectos del impuesto sobre la renta por \$4,155,694,747.00 cantidad que resulta ser superior a la cantidad de \$1,473,571,765.00, actualizada en enero de 2019, mediante oficio número 900-03-05-00-00-2019-80109 del 25 de marzo de 2019, girado por la L.C. Laura Padrón Ramírez, Administradora de Fiscalización a Grupos de Sociedades "5", notificado legalmente previo citatorio al Representante Legal, a la C. Carmen Lucía Bautista Velasco, en su carácter de tercero, el 26 de marzo de 2019, quien se identificó con credencial para votar expedida por el entonces Instituto Federal Electoral, con número 6197009077815, con vigencia al año 2021, le concedió un plazo de quince días hábiles contados a partir del día siguiente a aquél en que surtió efectos la notificación del mismo, para que presentara ante esta dependencia, con domicilio en Avenida Hidalgo número 77, Módulo III, planta baja, colonia Guerrero, Alcaldía Cuauhtémoc, código postal 06300, en esta Ciudad de México, la documentación e información que se menciona en el oficio antes citado, con motivo del ejercicio de las facultades de comprobación que se efectúan de conformidad con el artículo 42, primer párrafo, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, por el ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2013.

Por tanto, esta juzgadora concluye que la resolución impugnada se encuentra debidamente fundada y motivada.

Sirve de apoyo a lo antes expuesto, las siguientes jurisprudencias emitidas por el Poder Judicial de la Federación, cuyos textos disponen:

"Registro No. 231989
Localización: Octava Época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Semanario Judicial de la Federación I,
Enero a Junio de 1988 Página: 836
Tesis: I.2o.A.6
Jurisprudencia Materia(s): Administrativa

MULTAS. ARBITRIO DE LAS AUTORIDADES PARA IMPONERLAS ENTRE EL MINIMO Y EL MAXIMO PERMITIDO POR LA LEY. DEBE RAZONARSE. Las autoridades administrativas pueden cuantificar las multas que correspondan a infracciones cometidas y, al hacerlo, gozan de plena autonomía para fijar el monto que su amplio arbitrio estime justo dentro de los límites señalados en la ley; empero, al determinar la sanción, deben expresar pormenorizadamente los motivos que tengan para fijar la cuantía de la multa, para lo cual hay que atender a las peculiaridades del caso y a los hechos generadores de la infracción, y especificar cómo influyeron en su ánimo para detener dicho arbitrio en cierto punto entre el mínimo y el máximo en que oscila la multa permitida en la ley.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Registro No. 186216
Localización: Novena Época
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XVI,
Agosto de 2002
Página: 1172 Tesis: VI.3o.A. J/20
Jurisprudencia Materia(s): Común

MULTAS. INDIVIDUALIZACIÓN DE SU MONTO. Basta que el precepto legal en que se establezca una multa señale un mínimo y un máximo de la sanción, para que dentro de esos parámetros el aplicador la gradúe atendiendo a la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor, la reincidencia o cualquier otro elemento del que puede inferirse la levedad o la gravedad del hecho infractor, sin que sea necesario que en el texto mismo de la ley se aluda a tales lineamientos, pues precisamente al concederse ese margen de acción, el legislador está permitiendo el uso del arbitrio individualizador, que para no ser arbitrario debe regirse por factores que permitan graduar el monto de la multa, y que serán los que rodean tanto al infractor como al hecho sancionable.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO.

De acuerdo a lo antes expuesto, esta juzgadora considera procedente reconocer la validez y legalidad de la resolución impugnada.

QUINTO.- En el concepto de anulación marcado como **TERCERO del escrito de demanda**, la accionante manifestó que, al ser ilegal la resolución impugnada, esta juzgadora debe reconocer el derecho subjetivo que le asiste a la devolución de la multa impuesta con su respectiva actualización e intereses.

La autoridad demandada sostuvo la legalidad de la resolución impugnada, argumentando que no procede la devolución de la multa impuesta.

Esta instrucción considera **INFUNDADO** el argumento en estudio, de acuerdo a los siguientes razonamientos.

Contrario a lo señalado por la impetrante, la resolución impugnada es legal, tal y como quedó precisado en el considerando que antecede, en el cual se reconoció la validez y legalidad de dicha resolución, por lo que, es claro que **no procede devolución alguna del pago que realizó la actora de dicha multa.**

En vista de lo anteriormente expuesto, y con fundamento en los artículos 49, 50, 52, fracción I y 58-13 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se resuelve:

I.- La parte actora **NO** acreditó los extremos de su pretensión, en consecuencia;

II.- **SE RECONOCE LA VALIDEZ DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA**, misma que ha quedado debidamente precisada en el resultando primero del presente fallo.

III.- **NOTIFÍQUESE POR BOLETÍN JURISDICCIONAL A LAS PARTES.**

Así lo resolvió y firma la magistrada instructora del presente juicio, ante la secretaria que autoriza y da fe.

Magistrada Instructora y Presidenta de Sala
Elva Marcela Vivar Rodríguez

Blanca Xóchitl Quintero Paniagua
Secretaria de Acuerdos

“La Sala que al rubro se indica, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y la fracción I del Trigésimo Octavo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas; indica que fueron suprimidos de la versión pública de la presente sentencia datos personales y demás información considerada legalmente como confidencial, por actualizar lo señalado en dichos supuestos normativos. Firma el secretario de acuerdos que emite la presente.”